

12 de agosto de 2009

Secretaria Hillary Rodham Clinton
Departamento de Estado
2201 C St. NW
Washington, DC 20520

Estimada Secretaria de Estado Clinton:

Escribimos esta carta remitida a su atención con una urgente preocupación por las negociaciones que recientemente han salido a la luz en torno al posible acceso por parte del aparato militar de EEUU a siete bases militares en Colombia y su impacto sobre las relaciones entre los países de la Región Andina –que sufren un rápido deterioro-- y entre aquellos y EE UU. Al mismo tiempo, deseamos trasladarle nuestra inquietud por el efecto que esta decisión tendrá sobre las propuestas de acuerdo en las políticas contra el narcotráfico y en la promoción de los derechos humanos, dos cuestiones que consideramos prioritarias.

Quisiéramos hacer hincapié en las palabras que el presidente Obama pronunció ante los líderes americanos del Hemisferio en abril: “Si nuestra única interacción con la mayoría de estos países es la intercepción del tráfico de drogas –si nuestra única interacción es militar– entonces no podemos desarrollar las relaciones que con el tiempo pueden aumentar nuestra influencia y suponer un efecto beneficioso”. Sin embargo, establecer bases militares en el área con amplios y ambiguos mandatos es una inversión basada en dar respuestas militares para todo, desde la pobreza hasta las tensiones bilaterales.

Un acuerdo negociado de forma apresurada para lograr bases militares en Colombia supone enormes peligros para todo el Hemisferio. Los líderes de Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua han respondido de forma crítica y públicamente contra las instalaciones propuestas, incluso sugiriendo medidas que abarcan desde la suspensión de las relaciones diplomáticas hasta un bloqueo comercial.

Las consecuencias potenciales de la creciente tensión en la región son amplias y profundas. En un contexto marcado por el golpe de Estado en Honduras, la sensación de inestabilidad en Latinoamérica es muy acusada. Además, Venezuela es el segundo socio comercial más importante de Colombia, país con el que intercambia alrededor de 7 mil millones anuales en transacciones comerciales. Una suspensión temporal del comercio bilateral generaría un impacto muy grave para una gran parte de la población. Y en el caso de que las relaciones entre Colombia y Venezuela se deterioraran en un futuro, la presencia del ejército norteamericano sería susceptible de ser utilizada por Colombia como una cobertura para actos que supondrían una escalada del conflicto, sabiendo que EE UU intervendría para proteger sus intereses en la zona.

En el contexto actual, resulta racional que los líderes regionales vean la instalación de varias bases militares norteamericanas en Colombia como una amenaza potencial hacia su seguridad. La base de esta percepción se sustenta en los siguientes hechos:

- El ataque ilegal del ejército Colombiano fuera de sus fronteras a un campo de las FARC en territorio de Ecuador en marzo de 2008, lo cual precipitó una ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, las cuales todavía no han sido restauradas. En aquel momento, el presidente Obama manifestó que respaldaba dicho ataque.
- El gobierno colombiano ha acusado a oficiales de alta jerarquía de Venezuela y Ecuador de prestar apoyo a las FARC basándose en unas evidencias que han sido cuestionadas por dichos gobiernos, circunstancia que ha dado una dimensión internacional a la lucha antiterrorista de las fuerzas armadas en Colombia.
- A pesar de que el acuerdo de Manta se refería exclusivamente al monitoreo aéreo en la interceptación y lucha contra el tráfico de drogas, las fuerzas norteamericanas llevaron a cabo en Manta operaciones de arresto de indocumentados ecuatorianos en botes localizados dentro de aguas ecuatorianas. Aunque el acuerdo propuesto con Colombia presumiblemente prohibiría operaciones al otro lado de las fronteras sin el permiso del tercer país, las violaciones de los términos del acuerdo de Manta generan legítimas dudas en los líderes de los países vecinos.
- El Departamento de Defensa expone que persigue “una serie de acuerdos de acceso para operaciones de contingencia, logística y entrenamiento en América Central y Sudamérica”. USSOUTHCOM persigue el establecimiento de una base con “movilidad aérea en el continente de Sudamérica” desde el año 2005, según la Comandancia de Movilidad Aérea.
- Establecer y expandir la presencia militar de EEUU en Colombia evoca la larga y dolorosa historia de las intervenciones norteamericanas en Latinoamérica y El Caribe.
- También manifestamos nuestro temor de que este acuerdo sobre las bases militares represente una puerta trasera para proseguir con el respaldo militar al ejército de Colombia, a pesar de que el pasado año se documentó que el ejército asesinó a más de 1.000 civiles, alegando que se trataba de guerrilleros muertos en combate, con el propósito de incrementar sus estadísticas. Fuentes del Ministerio de Defensa colombiano han desvelado que Colombia está intentado obtener un aumento en la ayuda militar de EEUU como parte de la negociación sobre las bases militares. La propia base de Palanquero, la cual alberga una unidad del ejército del aire colombiano, fue proscrita a la hora de recibir ayuda norteamericana durante 5 años debido al papel que jugó en el ataque que mató a 17 civiles, incluidos 6 niños, en 1998.

Resulta necesaria una revisión de la política de Colombia encaminada a afrontar las serias violaciones de derechos humanos en el seno de las Fuerzas Armadas de Colombia y del Estado, prácticas que incluyen: los asesinatos de civiles cometidos por el Ejército Colombiano desde

2002, los cuales fueron calificados de “extendidos y sistemáticos” por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y cuyo grado de impunidad se sitúa en un 98%; la persistencia y el incremento de los desplazamientos forzados masivos de población rural de sus tierras, con más de 380.000 personas obligadas a abandonar sus casas en el último año; vigilancia ilegal, acusaciones infundadas y operaciones encubiertas contra defensores de los derechos humanos, periodistas, jueces de la Corte Suprema y líderes de los partidos de la oposición a manos de la agencia de seguridad presidencial y, en algunos casos, a manos de unidades de inteligencia militar.

A la luz de estas consideraciones, la Administración debería reconsiderar su intención de centrar sus estrategias en la región exclusivamente en la alianza con el ejército colombiano. Para extender las relaciones con Sudamérica y el reconocimiento de los derechos humanos, EEUU no debería crear una fortaleza en Colombia en connivencia con los peores violadores de los derechos humanos de la región, el ejército colombiano.

Cabe destacar también que la Administración todavía no ha iniciado una revisión de la política contra el narcotráfico en la Región Andina que sea capaz de evaluar el fracaso de las políticas que se centran en intentar bloquear la oferta y el suministro de droga. De hecho, estas políticas no están logrando el más mínimo impacto cuantificable a largo plazo en el precio, la pureza y la disponibilidad de cocaína en EEUU. En cualquier caso, la naturaleza internacional del tráfico de drogas requiere un acercamiento regional que construya un consenso de las naciones implicadas. La Administración debería utilizar la cercanía de la base de Manta como una oportunidad para derivar recursos hacia programas de tratamiento y prevención de la drogadicción que actualmente trabajan en reducir la demanda de narcóticos ilegales.

Por todos los motivos expuestos, le urgimos a que adopte las siguientes medidas:

-Suspensión de las negociaciones para expandir el acceso del ejército de EEUU a bases u operaciones en Colombia, así como el inicio de un diálogo con los líderes Sudamericanos para abordar los problemas de seguridad comunes en la región, incluidos aquellos relacionados con el tráfico de narcóticos.

-Iniciar una revisión de la política de EE UU en lo relativo a Colombia al objeto de que su principal objetivo sea la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado y la promoción del respeto por los derechos humanos.

-Instar de forma urgente al presidente Obama a que requiera al director de la ONDCP, Gil Kerlikowske, para que lleve a cabo una revisión de la política estadounidense contra el narcotráfico que se traduzca medidas concretas de financiación prioritaria para hacer visible el problema del tráfico de droga como una cuestión de “crisis de salud pública” y no como una “guerra contra el narcotráfico”.

Quedamos a la espera de su respuesta a estas preocupaciones y requerimientos.

Atentamente,

Organizaciones y Líderes de Fé

American Friends Service Committee

Baptist Peace Fellowship of North America

Rev. Zenju Earthlyn Manuel, Executive Director
Buddhist Peace Fellowship

Peace and Social Concerns Committee
Chestnut Hill Friends Meeting

Christian Peacemaker Teams Colombia

Rev. Dr. Rita Nakashima Brock, Director
Faith Voices for the Common Good

Fellowship of Reconciliation

Interfaith Peace-Builders

Jesuit Refugee Service/USA

Maryknoll Office for Global Concerns

J Ron Byler, Acting Executive Director
Mennonite Church USA

Susan Mark Landis, Peace Advocate
Mennonite Church USA

Mennonite Central Committee U.S.
Washington Office

Pentecostals & Charismatics for Peace & Justice

Presbyterian Church, (USA), Washington Office

Rick Ufford-Chase, Executive Director
Presbyterian Peace Fellowship

Presbyterian Church (USA), Washington Office

The Leadership Council
Sisters, Servants of the Immaculate Heart of Mary, Monroe, MI

Barbara Gerlach, Colombia Liaison
United Church of Christ Justice and Witness Ministries

Sharon Hostetler, Executive Director
Witness for Peace

Organizaciones y Líderes Nacionales

Ruth Goring, Codirector
Across the Americas

AFRODES USA

Chuck Kaufman, National Co-Coordinator
Alliance for Global Justice

Americas Program, Center for International Policy

James Jordan, National Coordinator
Campaign for Labor Rights

Mark Weisbrot, Co-Director
Center for Economic and Policy Research

Medea Benjamin, cofounder
CODEPINK

Chloe Shwabe and Cristina Espinel, Co-Directors
Colombia Human Rights Committee

Frank Llewellyn, National Director
Democratic Socialists of America

Foreign Policy In Focus

Forjando Alianzas
Kirsten Moller, Executive Director
Global Exchange
Granny Peace Brigade
Grassroots International
Guatemala Human Rights Commission/USA
Highlander Research and Education Center
Peter and Gail Mott, Co-Editors
INTERCONNECT
Robert Naiman, Policy Director
Just Foreign Policy
Lee Siu Hin, National Coordinator
National Immigrant Solidarity Network
Katherine Hoyt, National Co-Coordinator
Nicaragua Network
Mubarak Awad , President
Nonviolence International
Christy Thornton, Executive Director
North American Congress on Latin America
Blase Bonpane, Ph.D., Director
Office of the Americas
Paul Martin, Political Director
Peace Action
School of the Americas Watch
September 11th Families for Peaceful
Tomorrows
Nicole Lee, Esq., Executive Director
TransAfrica Forum

Daniel Kovalik, Senior Counsel
United Steelworkers, AFL-CIO (USW)

Kelly Nicholls, Executive Director
U.S. Office on Colombia

Alfred L. Marder, President
US Peace Council

Women Against War

World Without Wars/USA

Organizaciones Comunitarias

8th Day Center for Justice

Martin Eder, Executive Director
Activist San Diego

Brooklyn For Peace

Gail S Phares Director
Carolina Interfaith Task Force on Central
America

Luis Suárez, Special Projects Coordinator
Center For Employment Opportunities

Colombia Action Research Collective
Marilyn Lorenz, Program Coordinator
St. Louis Inter-Faith Committee on Latin
America

Community Action on Latin America
Chicago-Cinquera Sister Cities

Ella Baker Human Rights Center

IRTF: InterReligious Task Force on Central
America

Movement for Unconditional Amnesty

Nicaragua Center for Community Action

David Hartsough, Executive Director
PEACEWORKERS

Bill Scheurer, Coordinator
Peace Garden Project

Resource Center for Nonviolence

School of the Americas Watch: Los Angeles, San Francisco and East Bay Chapters

Javier Guzman, Recording Secretary
UFCW Local 348-s

U.S.-El Salvador Sister Cities

Nada Khader, Executive Director
WESPAC Foundation

Otras Naciones

Ana Juanche, Latin American Coordinator
Service for Peace and Justice (SERPAJ) –
Latin America

Wilbert van der Zeijden, Coordinator
International No Bases Network

Communicators for Peace (Spain)

Members of the Executive Committee
Centre for Research on Latin America and
the Caribbean at York University
(CERLAC), Toronto, Canada

Latin American Canadian Solidarity
Association
London, Ontario, Canada

Bruce Allen, President
St. Catharines & District Labour Council

Edmonton Small Press Association (ESPA)

Fair Trade Algoma

Académicos

Michael C Batinski, Professor of History
Emeritus
Southern Illinois University Carbondale

Lorraine Bayard de Volo, Associate
Professor
Women and Gender Studies
University of Colorado, Boulder

Peter Bohmer, faculty in economics,
Evergreen State College

Roseann Cohen, PhD Candidate
University of California, Santa Cruz

Roxanne Dunbar Ortiz, Professor Emeritus
California State University.

Jenny Escobar, Doctorate Candidate
University of California Santa Cruz

Jonathan Fox, Professor
Latin American and Latino Studies Dept.
University of California, Santa Cruz

Shannon Gleeson, Assistant Professor
Latin American and Latino Studies
Department
University of California- Santa Cruz

José Enrique González Ruiz
Human Rights Program Coordinator
Autonomous University of Mexico City

Fredrik Johansson, Masters in Transport
Economy
Université Lumière Lyon 2, France

Flora Lu, Assistant Professor
Latin American and Latino Studies
University of California, Santa Cruz

Professor Catherine Lutz, Watson Institute
for International Studies
Brown University

Carlo R. Moreno. PhD Student
Dept. of Environmental Studies
University of California, Santa Cruz

Hector Perla Jr., Assistant Professor
University of California, Santa Cruz

Suyapa G. Portillo Villeda, CFD Fellow
History Department, Pomona College

Joanne Rappaport
Professor of Anthropology
Georgetown University

Miguel Tinker Salas
Professor of Latin American History
Pomona College

Timothy F. Simpson
Editor, Political Theology

Adriana Tovar Cortés
Masters in Latin American Studies
Stockholm University.

David Vine, Assistant Professor
American University

Thomas W. Walker, Professor Emeritus,
Political Science, Ohio University

Jeffery R. Webber
Assistant Professor, Political Science
University of Regina, Canada

Dr Sonja Wolf, Research Fellow
Instituto Tecnológico Autónomo de México

Cc: Robert Gates, Secretario de Defensa
Dan Restrepo, Consejo de Seguridad Nacional
William Brownfield, Embajador de Estados Unido en Colombia

